

chile: el inicio de una revolución

LEOPOLDO GONZÁLEZ AGUAYO

El 4 de noviembre de 1970 el doctor Salvador Allende Gossens, candidato de una coalición de partidos y grupos de izquierda chilenos, recibía la investidura presidencial e inicia un régimen que al fin de seis años se propone "poner a Chile en el camino del socialismo".

¿Cómo podría ocurrir un acto parecido si la experiencia probaba que los regímenes revolucionarios se instauraban por vía poco convencional, mediante una lucha armada? La respuesta podría encontrarse, en parte, en el arraigo de los partidos para controlar efectivamente la vida política del país, en el civismo del pueblo chileno y en la tradición civil y democrática de los dirigentes políticos.¹

Si la izquierda ha conquistado el poder y ha puesto en marcha su radical programa, el ascenso no fue "automático" y consecuente con el triunfo en unas elecciones perfectamente legales como las del 4 de septiembre pasado.

La coalición que llevó a Allende al poder, la Unión Popular, la forman los siguientes partidos y grupos: Partido Socialista, Partido Comunista Chileno, Partido Radical, Movimiento de Acción por la Unidad Popular (MAPU), Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente. De éstos, el Partido Socialista y el Partido Comunista son los únicos partidos marxistas latinoamericanos que cuentan con una real base obrera.² Coaliciones de izquierda del tipo frente popular habían presentado la candidatura de Allende en las elecciones presidenciales de 1958 y

¹ Silas Cerqueira y otros. *Tableau des Partis Politiques en Amerique du Sud*, París, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1969, p. 182.

² Silas Cerqueira. *op. cit.*, pp. 165-167.

de 1964.³ En 1958 el Frente de Acción Popular (FRAP) reuniendo al Partido del Trabajo, al Partido Democrático, al Partido Democrático del Pueblo y al Partido Comunista, perdió en los comicios por un margen de 35 000 votos frente al conservador Jorge Alessandri. En 1964 el FRAP volvió a perder, en esa ocasión frente a Eduardo Frei, candidato de la Democracia Cristiana que logró 1 418 000 votos frente a 982 000 del FRAP.

La víspera de las elecciones de septiembre último los tres candidatos: Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana, Jorge Alessandri por la coalición de conservadores y liberales y Allende por la Unidad Popular, aparecían con sus fuerzas más o menos equilibradas después de una acalorada campaña. El resultado de las elecciones favoreció a Allende con 1 075 616 votos (36.3 por ciento del total), o sea poco menos de 40 000 votos con respecto a Alessandri que recibió 1 036 278 sufragios (34.9 por ciento del total), Tomic fue el candidato menos favorecido con 824 849 votos (27.8 por ciento del total). Como ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, de acuerdo con la Constitución, correspondía al Congreso designar al sucesor de Frei en un plazo de dos meses a partir de las elecciones. La tradición chilena a este respecto indica que el Congreso se inclina siempre por el candidato más favorecido en los comicios. En esta ocasión las fuerzas que se dicen más respetuosas

³ Los frentes populares habían llegado al poder en Chile anteriormente, por vez primera en 1938-1941, bajo la presidencia del radical Pedro Aguirre Cerda, la segunda llevando también al poder al radical Gabriel González Videla de 1946 a 1949. Ambas experiencias contaron con el apoyo del Partido Comunista. Por otra parte, Salvador Allende había sido el candidato del Partido Socialista a las elecciones presidenciales de 1952.

de las tradiciones harían todo lo posible por impedir que el Congreso eligiese al candidato de la Unidad Popular.

Con una guerra declarada pocas horas después de conocido su triunfo electoral, Allende tuvo la brillante oportunidad de demostrar sus dotes de negociador para apaciguar con habilidad tanto a sus partidarios como a la derecha, que amenazaban no sólo con impedirle el ascenso al poder sino hundir al país en una espiral caótica antes de la reunión del Congreso.

Pocas horas después de las elecciones del 4 de septiembre, los partidarios del expresidente Jorge Alessandri publicaban un comunicado en el que ponían en duda las posibilidades de Allende para llegar a la presidencia, dado el escaso margen de votos que lo separaba de su candidato, y agregaban su oposición completa a la instauración de un régimen "marxista". Allende replicó que en 1958 había perdido las elecciones frente al propio Alessandri por un margen mucho menor que el que ahora se discutía y sin embargo no dudó en plegarse a la tradición democrática. Unos días después Alessandri, "presionado" por algunos extremistas de la derecha, hacía publicar un nuevo comunicado en el cual decía que "dimitiría inmediatamente" si era elegido presidente por el Congreso. La medida tendía a cerrar el paso al candidato de la Unión Popular y obligar a la convocación de nuevas elecciones en las que la derecha daría sus votos al centro para hacer triunfar un candidato moderado, presumiblemente el propio Eduardo Frei. La izquierda contestó que la maniobra era demasiado grotesca y como aviso para que los centristas no la secundaran advirtió que se preparaba a salir a la calle a defender su triunfo por "todos los medios".

La campaña anti-allendista estaba en toda forma. La prensa de la derecha, entre la que destacaba el diario *El Mercurio*, perfectamente conocido como vocero de los grupos financieros,⁴ orquestaba en el interior, y en el exterior la oposición al "marxismo" la llevaban los diarios y revistas estadounidenses. Todos los medios "extralegales" se pusieron en juego para triunfar sobre los legales. Se intrigó con la alta oficialidad del ejército invitándola abiertamente a terminar con la nueva experiencia. Grupos de extremistas de tendencia fascista encontraron aliento y la policía arrestó a varias personas, incluyendo dos oficiales, acusadas de preparar atentados contra Allende

⁴ Silas Cerqueira, *op. cit.*, p. 162. Ver también, *Nouvel Observateur*, 2 de noviembre de 1970.

y otros dirigentes izquierdistas y moderados. La campaña logró sus mejores efectos al desatar un pánico financiero y económico y con la expatriación de numerosos residentes del país: los bancos privados suspendieron los créditos; las empresas industriales y comerciales, redujeron sus pedidos y entregas y despidieron a la mano de obra excedente; varias empresas norteamericanas cancelaron sus contratos y repatriaron parte de su personal; la especulación de divisas corrió pareja al deterioro de la cotización del escudo (en unos cuantos días las cotizaciones pasaron de 14.5 escudos por dólar en el mercado oficial, y 21 en el mercado negro, a 50 escudos por dólar). El ministro de Economía del gobierno de Frei declaraba, a mediados de octubre, que la fuga de capitales alcanzaba alrededor de 100 millones de dólares.⁵ Por esta misma fecha se calculaba que no menos de 14 000 personas habían "huido", principalmente hacia Argentina. La campaña culminó con el atentado que costó la vida al jefe de las fuerzas armadas general René Schneider, apreciado por su apego a las soluciones democráticas.⁶

El asesinato del general Schneider conmovió profundamente a la opinión pública, y la derecha perdió otra batalla más, al tomar conciencia el país de lo que ésta sería capaz de realizar a efecto de preservar sus intereses.

En las exequias todos los sectores testimoniaron su apoyo a Allende en símbolo de la aspiración a las soluciones pacíficas. El ministro de la Defensa y los jefes de las tres armas declararon "su firme determinación de cumplir lealmente su misión". Desde unos días antes Alessandri, viendo sus posibilidades agotadas y atemorizado por los efectos de la campaña, hizo saber discretamente a Allende que "deseaba su victoria". El 20 de octubre había declarado públicamente: "deseo que Salvador Allende pueda asumir la magistratura suprema en un clima de tranquilidad a fin

⁵ Los rumores más extravagantes encontraron eco: se repartirían los automóviles particulares, se requisarían las residencias de la burguesía para alojar a los obreros y a los "sin casa", se impediría viajar al extranjero, se bloquearían las cuentas bancarias, y, naturalmente, aparecerían los "paredones".

⁶ En octubre de 1969 el general Schneider fue el mejor respaldo del presidente Frei para reducir el levantamiento "por razones profesionales" del general Roberto Viaux. En abril de 1970 tampoco escatimó su apoyo al gobierno para desbaratar una conjura de altos oficiales. El 21 de octubre un comando de extrema derecha trató de secuestrarlo con el propósito de "canjearlo" por el compromiso de que el Congreso descartara la candidatura de Allende. La resistencia del general a sus secuestradores marcó la última nota del drama político.

de reactivar la economía nacional y favorecer la paz y el bienestar para todos los chilenos”.

Por lo que respecta a los votos del centro, su actuación estuvo caracterizada por dos tipos de tendencias: en favor o en contra de Allende. Radomiro Tomic, amigo personal de Allende, fue el primero en felicitar al candidato de la Unión Popular al conocerse el resultado de las elecciones. Los otros dirigentes de la Democracia Cristiana prefirieron tranquilizar a sus alas derechas esperando negociar con la Unión Popular el precio de la aportación de los votos de sus representantes en el Congreso (que cuenta en la actualidad 80 representantes de la Unión Popular, 75 demócrata-cristianos y 45 alessandristas), votos que requería la Unión Popular para acceder a la presidencia.

Tras un regateo con la Democracia Cristiana Allende aceptó una enmienda, que se anexó a la Constitución, en la que quedaban garantizadas las libertades sindicales, el pluralismo político, la autonomía universitaria, ciertas libertades individuales como la religiosa, la de enseñanza, la de prensa, la de expresión, y la intangibilidad de los cuadros del ejército y de los carabineros. Sin embargo Allende se opuso terminantemente a los deseos de ciertos dirigentes demócrata-cristianos que pretendían que su partido jugara el papel de “guardián de las instituciones democráticas”, y se opuso aún con más tenacidad a aquellos que presentaron el proyecto de que fuese el ejército quien ocupara tal función.⁷

La presión de Tomic y finalmente la amenaza del ala izquierda de la Democracia Cristiana de abandonar el partido si se continuaba haciendo el juego a la derecha, llevó a los dirigentes de la Democracia Cristiana a acceder a las demandas de la Unión Popular en el Congreso.

El Congreso votó finalmente a fines de octubre con el siguiente resultado: 153 votos a favor de Allende, 35 en favor de Alessandri y 7 abstenciones.

Para el momento en que Allende tomaba posesión ciertos sectores de la derecha mostraron una actitud más ecuaníme, actitud a la que no era ajena la moderación del nuevo presidente. En consecuencia, una

⁷ “El papel de las fuerzas armadas y de la policía —declaró Allende— debe ser estrictamente profesional; el supuesto papel de garante sería antidemocrático y contrario a la tradición civil chilena”. Sobre el papel del presidente como jefe máximo de las fuerzas armadas puntualizó: “soy un defensor intransigente de las prerrogativas del Jefe del Estado en ese dominio”.

misión económica encabezada por Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que agrupa a los grandes terratenientes, se aprestaba a partir a Cuba para negociar un nuevo acuerdo comercial.⁸

Para formar el gabinete Allende debió realizar negociaciones con la coalición que lo llevó al triunfo, quedando finalmente constituido de la siguiente manera: Relaciones Exteriores: Clodomiro Almeida (socialista); Interior: José Toha González (socialista); Vivienda: Carlos Cortés (socialista); Defensa: Alejandro Ríos Valdivia (radical); Minas: Orlando Cantuarias (radical); Educación: Mario Astorga (radical); Agricultura: Jacques Chonchol (MAPU); Trabajo: José Oyarce (comunista); Obras Públicas y Transportes: Pascual Barraza (comunista); Justicia: Lisandro Cruz (Acción Popular Independiente); Salubridad: Jiménez Pinochet (social demócrata); Tierras y Colonización: Humberto Martones (social demócrata); Economía: Pedro Vuskovic (independiente); y, Secretario General de Gobierno: Jaime Suárez (socialista).

Del examen del gabinete se deduce que en su composición han jugado tanto el deseo de dar satisfacción a las fuerzas de la coalición como a algunas del exterior. Los socialistas se reservaron los ministerios claves del Interior, Relaciones Exteriores y el nuevo cargo de Secretario General de Gobierno, ocupado por un hombre de la extrema confianza del presidente que se espera ejerza las funciones de presidente del Consejo de Ministros; el Ministerio de Finanzas, de obvia significación, fue atribuido a un miembro del Partido Comunista; es significativo que el Ministerio de la Defensa fuese dejado en manos de un radical, en otros términos, un “moderado”. Dos especialistas de alta reputación internacional ocupan los ministerios técnicos a los que se espera dar gran dinamismo: Agricultura y Economía.⁹

⁸ Allende declaró en diversas ocasiones que su partido rechazaba las soluciones de fuerza, prefiriendo siempre “el voto al fusil”, y que el régimen no instauraría una “aristocracia del proletariado”. En una ocasión recomendó “moderación” en el uso de sus derechos a obreros en huelga. Como prueba de su buena voluntad, una vez recibida la investidura presidencial, asistió al tradicional *Te Deum* en la catedral de Santiago acompañado de su gabinete, siendo “recibido con vivas muestras de cordialidad por los ministros de todos los cultos del país que expresaron los mejores votos por el éxito de su gobierno”.

⁹ *Le Monde*, noviembre 19 de 1970.

Si la Unión Popular se propone poner a Chile en el "camino del socialismo", en cierta medida la Democracia Cristiana puso el camino para el ascenso definitivo de la Unión Popular.

Cabe recordar que el triunfo de la Democracia Cristiana en las elecciones de 1964 resulta explicable si se tiene en mente la relativa juventud de los cuadros dirigentes del partido, la moderación ideológica que entonces daba satisfacción a las clases medias, especialmente a un número importante de mujeres de esta clase que aspiraban a votar por vez primera, y a un programa relativamente radical que atrajo a una parte del electorado de izquierda.¹⁰

Aunque el programa parecía desproporcionado a las posibilidades de seis años, y mucho menos de ese tiempo para realizaciones efectivas, el balance no es malo del todo: 3 000 escuelas; 270 000 alojamientos; 3 200 000 hectáreas expropiadas a partir de 1967; 28 000 familias instaladas en las tierras expropiadas; una notable expansión industrial particularmente en el sector automotriz; alrededor del 50 por ciento de incremento en los efectivos de la enseñanza primaria y 117 por ciento en la secundaria. La Democracia Cristiana comenzaba a organizar a la población, creando entre otras instituciones las "Juntas de Vecinos" de las que se contaban 2 380 hace un año, destinadas a la discusión de los problemas locales; por último instauró un principio de reforma fiscal que comenzó a operar al final del periodo gubernamental.

Pero los problemas tradicionales sobre los que la población era particularmente sensible no fueron resueltos, ni siquiera paliados por la Democracia Cristiana. Después de 1965 el costo de la vida ha aumentado 154 por ciento, problema que con el de la desocupación creciente y el de la migración masiva del campo a los centros urbanos, ocasionaron un serio deterioro al prestigio de la Democracia Cristiana. El resultado de las elecciones de septiembre es fiel reflejo de la situación, al obtener el candidato demócrata-

¹⁰ El programa de reformas presentado por Eduardo Frei, en 1964, comprendía, en líneas generales: doblar la producción de cobre y nacionalizar progresivamente la industria; decretar la reforma agraria e instalar 100 000 nuevos propietarios; construir 360 000 alojamientos; asegurar un pleno empleo bien remunerado; enseñanza obligatoria entre 6 y 15 años; reducción del analfabetismo de 15% a 5%; disminución gradual de la inflación. Ver, "Chili: le Defi Latino american", *Jeune Afrique*, noviembre 17 de 1970.

cristiano el 60 por ciento de los votos que consiguió su partido en 1964.

Como partido de centro la Democracia Cristiana tenía que vencer, para realizar sus reformas, la oposición de sus alas derechas que de diversas maneras se sentían afectadas por los proyectos de reformas, desconfiando particularmente de la agraria y la fiscal. Estas fuerzas se aliaban a los partidos de la derecha para entorpecer el proceso con toda clase de pretextos o problemas de procedimiento. Por otra parte, al no disponer el partido gubernamental de la mayoría absoluta en el Congreso, también ahí encontraría serios problemas para sus proyectos más avanzados. Finalmente cuando algunas reformas lograron ponerse en marcha, como la agraria a partir de 1967, el proceso de afectación de los latifundios era tan desesperadamente lento, entre otras razones por la indemnización completa que se preveía pagar a los propietarios afectados, que los progresistas se impacientaron y algunos dejaron el partido, como el ingeniero Jacques Chonchol, especialista en problemas agrarios de reputación internacional, que salió para formar el MAPU. Tampoco es posible olvidar otros problemas, como la sequía de 1967-1968, que crearon múltiples dificultades e incidieron directamente sobre la inflación.

Otro elemento que no dejará de utilizar la Unión Popular es el proceso de "nacionalización"¹¹ de la industria del cobre "por etapas" que inició el gobierno de Frei.

En junio de 1969 el gobierno firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Anaconda, la cual a través de dos filiales en el país: la Chile Exploration Company y la Andes Mining Company (que explotaban las minas de Chuquicamata, El Salvador y Potrerillos) controlaba más de la mitad de la producción cuprífera chilena. Poco después el gobierno llegó a acuerdos para la compra del 51 por ciento de las acciones de la Sociedad Minera El Teniente, filial de la Braden Copper Co., para pasar a controlar la cuarta parte de la nueva mina La Exótica, de la Anaconda. A fines de 1969 el Estado chileno pasó a controlar el 25 por ciento de las acciones de la Compañía Minera Andina y el 30 por ciento de las de la Compañía Anónima Cuprífera de SAGASCA, subsidiarias de empresas norteamericanas.

El 1º de enero de 1970 el 51 por ciento de las acciones de las filiales de la Anaconda pasaron a propiedad del Estado, quien pagaría por ellas 197 millones de

¹¹ "Chilenización" le llamó la Democracia Cristiana.

dólares, en semestres, durante doce años. El acuerdo prevé que el resto de las acciones estará a disposición del Estado a partir del 31 de diciembre de 1972 durante un periodo de doce años, a condición de que para entonces el gobierno hubiese cubierto ya el 60 por ciento del valor del 51 por ciento de las acciones. En este renglón el esfuerzo económico previsto era considerable, el proyecto del gobierno calculaba que sólo el costo de la modernización, ampliación y apertura de nuevas minas para alcanzar una producción que pasara a 200 000 toneladas de cobre en 1972 implicaba alrededor de 767 millones de dólares, suma difícil de conseguir por el país pero que se revelaría muy rentable a corto plazo.¹²

Por otra parte, la industria del cobre ocuparía un papel estratégico y sería el pilar para planificar a su alrededor la vida económica y social de la nación, además el gobierno chileno podría convertirse en un árbitro privilegiado en la fijación de los precios del metal en los mercados internacionales. Téngase en

¹² Por lo que concierne al costo de compra de las acciones de las filiales de la Anaconda, los artículos 4 y 5 del acuerdo de junio de 1969 prevén: "el precio de compra del 51% será el correspondiente al valor en libros de las dos empresas cuya revisión corresponde a la Corporación del Cobre y a la Dirección de los impuestos interiores, y será pagado en cuotas semestrales en un plazo de doce años, con un interés de 6% al año. El valor en libros al 31 de diciembre de 1968 es aproximadamente de 197 millones de dólares y será actualizado el 31 de diciembre de este año (1969). Ninguna cuota será pagada al contado. El primer plazo de las cuotas a largo plazo será el 30 de junio de 1970.

"La compra del 49% restante de las acciones, según el contrato de promesa de venta decidida de común acuerdo, será efectiva a partir del 31 de diciembre de 1972, en el momento en que el gobierno de Chile lo decida soberanamente y de cualquier manera en un plazo de 12 años.

"Para que esta compra sea efectiva, en lo que concierne al 49%, será necesario haber pagado 60% del saldo debido sobre el precio del 51%.

"El precio de compra de las acciones representando el 49% se fijará en relación con la rentabilidad de las acciones después de la deducción de los impuestos, y será pagado en un plazo de 12 años a contar de la fecha en la cual será terminado el pago del precio del 51% con el 6% de interés anual.

"En otros términos, el plazo para pagar la compra total de las dos empresas será entre 19 y 24 años, según la voluntad soberana del pueblo chileno y la decisión y las posibilidades de nuestro país para encarar el esfuerzo económico que esto representa." Ver, "Chili: la situation Economique de l'Amerique du Sud, 1968-1969". Paris. Banque Française et Italienne pour l'Amerique du Sud, pp. 10-11, 86. Ver también, "Chile": *Comercio Exterior*, México, D. F., junio de 1970, pp. 470-471.

cuenta que de las minas de la Anaconda, la Kinecott y la Cerro Corporation salió el 79 por ciento del cobre chileno en 1968 y se sabrá que los deseos del Estado chileno no podrían ser más justificados.

Los términos del acuerdo de junio de 1969 caían perfectamente dentro del criterio de "revolución en la libertad" de la Democracia Cristiana, y difícilmente pasarían sin la crítica de la oposición de izquierda y aun de la del ala progresista del propio partido gubernamental, quienes reprocharon no el papel clave que se esperaba dar a la industria del cobre en la economía nacional, sino el plazo tan largo asignado para que el país pudiese disponer de los bienes de las grandes empresas y el costo de la operación (alrededor de 500 millones de dólares) considerado muy elevado. Por otra parte, era deducible que si se pretendía canalizar hacia el país mayores beneficios provenientes de las altas cotizaciones del cobre en el mercado internacional, nada aseguraría que tales ventajas se mantuviesen entonces.

Un aspecto de discusión teórica sería el relativo a considerar la afectación de las instalaciones de las grandes empresas cupríferas como una verdadera "nacionalización", ya que en ningún momento se ha pensado en el traspaso *total* de dicha actividad a la nación y que el Estado ocupe una posición absoluta sino sólo preponderante. Los programas, aun los de la izquierda, prevén sólo la afectación de las empresas que "ejercen una posición dominante" e imponen sus condiciones particularmente, en materia de precios. Estas deformaciones afectan a los pequeños productores, especialmente nacionales, a quienes el Estado piensa proteger y alentar.

Como se señaló anteriormente, otro motivo de fuertes críticas para el régimen de Frei fue el programa de reforma agraria, impugnado por su extrema lentitud y "tibieza". Críticas no desprovistas de fundamento si se tiene en cuenta que, como en buen número de países latinoamericanos, la propiedad agraria está concentrada en manos de un puñado de propietarios absentistas, 2.2 por ciento de las propiedades cuentan con más de mil hectáreas y representan el 73.2 por ciento de la superficie cultivada del país. Utilizando técnicas ancestrales, la producción agrícola no supera el 12 por ciento del PNB, pero reúne un poco menos de la mitad de la población activa y a pesar de ello el país es importador de alimentos de origen agropecuario. Se critica no haber reacomodado más que a 28 000 campesinos de los 100 000 para los

que Frei había prometido tierras y créditos en 1964, de los 250 000 campesinos sin tierras y parvifundistas existentes en el país en ese año.¹³

Para aventajar a la izquierda en las últimas elecciones presidenciales no quedaba otro camino a la Democracia Cristiana que presentar un programa tan radical como el de la propia Unión Popular y alentar al jefe de su ala progresista (Tomic) para atraer nuevamente al electorado de izquierda. Por esta razón la observación de que no menos del 64 por ciento de los votantes en las últimas elecciones aspiraba a cambios profundos, adquiere toda su significación si se consideran las posiciones avanzadas tan similares que guardaron durante la campaña la Unión Popular y Tomic, y los votos que reunieron.

El programa de Allende

El programa que presenta la Unión Popular es, en líneas generales, la actualización del programa del Frente de Acción Popular (FRAP) dado a conocer durante las elecciones de 1958 y 1964. Comprende los siguientes aspectos fundamentales: 1) reforzar y preservar los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; 2) transformar las instituciones actuales, instaurando un nuevo Estado con un nuevo sistema económico en el cual el pueblo tenga realmente el ejercicio del poder. Entre otras medidas se espera disolver el Congreso para reemplazarlo por una sola asamblea popular e introducir miembros de los organismos de representación popular en todos los órganos del gobierno, promulgar una nueva constitución acorde con la nueva situación, y reformar la policía y la justicia; 3) para luchar contra el subdesarrollo y la dependencia se espera poner en pie un programa de inversiones económicas y sociales que favorezca la producción de los bienes de consumo popular, el programa conlleva la aceleración de la reforma agraria, y a corto plazo la "nacionalización" de la gran industria del cobre, la nacionalización de los bancos y las compañías aseguradoras, de las grandes empresas de distribución, y de una manera general, todas las actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país; 4) realizar una efectiva reforma fiscal.¹⁴

Seguramente el programa de Allende se verá favorecido por el hecho de que el Estado controla desde hace

¹³ Silas Cerqueira, *op. cit.*, p. 172. Ver también, *Comercio Exterior, op. cit.*

¹⁴ *Le Monde*, noviembre 2 de 1970.

tiempo la energía eléctrica, la industria petrolera, el acero, los ferrocarriles, el azúcar y parte de las telecomunicaciones, a través de empresas como la Compañía de Acero del Pacífico, la Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa del Petróleo y la Industria Azucarera Nacional. Por otra parte, a través de diversos mecanismos, el Estado interviene hasta en el 60 por ciento de las actividades bancarias. Además, la Corporación de Fomento (la CORFO con un activo de 1, 300 millones de dólares y más 70, 000 empleados en sus subsidiarias) tiene la misión de programar el desarrollo económico del país desde la década de los años treinta; interviene directa e indirectamente en las actividades básicas de infraestructura y estimula diversas ramas industriales a través de sus créditos.

La política de inversiones extranjeras

Para realizar la política con respecto a las inversiones extranjeras el nuevo régimen encontrará gran apoyo en los técnicos de la CORFO y los importantes estudios que han preparado sobre la materia, en cierta medida modelos para otros países de América Latina. Un proyecto actualmente en estudio tiende a regular las inversiones en materia de colocaciones directas de capital, créditos, reinversiones, *know-how*, adquisiciones parciales y totales de empresas nacionales, inversiones mixtas, aportación tecnológica, repartición de utilidades, entre los principales aspectos. Son de destacarse los proyectos de unificación de la legislación referente a esta materia, actualmente muy dispersa, y la creación de un organismo *ad-hoc* de alto nivel técnico con los conocimientos necesarios para negociar con ventaja frente a los inversores internacionales, particularmente las grandes corporaciones multinacionales. El proyecto propone que actividades como las siguientes, consideradas "básicas para el desarrollo del país", deben estar totalmente excluidas para el capital extranjero: bienes de capital, derivados de la madera, derivados del cobre y agroindustrias. También deben descartarse las inversiones mixtas con participación minoritaria del Estado.¹⁵

El presidente Allende se refirió a estos problemas en los términos siguientes:

Habrà un sector económico exclusivamente estatal que comprenderá las empresas que pertenecen actualmente al Estado y aquellas que serán nacio-

¹⁵ CORFO. *Bases de Discusión de una política de Tratamiento al Capital Extranjero*, Santiago, 1970, p. 27.

nalizadas. Por esto último entiendo las empresas que controlan actividades que condicionan el desarrollo de nuestra economía. Al lado de éste, habrá un sector mixto, donde se combinarán los capitales del Estado con las inversiones privadas. El tercer sector, el más amplio, será el campo de acción de la propiedad privada y englobará más de 30 000 empresas y es también el que asegurará el mayor volumen de empleos para los trabajadores de todas categorías. En estos dos últimos sectores, el capital y la tecnología del extranjero serán bienvenidos en la medida que el interés sea recíproco.¹⁶

Aunque ninguna empresa extranjera ejerce un monopolio absoluto en ninguna actividad específica, el volumen del capital es muy importante y en ocasiones determinante en las siguientes ramas: tabaco, calzado, productos de caucho, productos alimenticios, productos y sustancias químicas, maquinaria, equipo y accesorios eléctricos. En estas tres últimas ramas la actuación de las empresas extranjeras "definen generalmente el curso del desarrollo del sector". Son ellas quienes "realizan e introducen las innovaciones, los nuevos productos, las inversiones más importantes y tienen eventualmente el control del mercado y de su expansión".

Como es también característico, existe una correlación directa entre las inversiones externas y el dinamismo y complejidad de las actividades donde se sitúan. También es característico que las empresas con participación extranjera sean de gran dimensión con respecto a las nacionales en el sector, y que el número de accionistas que la controlan sea reducido; por ejemplo en los productos de caucho 1.43 por ciento del total de accionistas (coincidiendo con aquéllos de nacionalidad extranjera) poseen el 44.22 por ciento del capital.¹⁷ También es característico que para las reinversiones se utilicen las utilidades en lugar de nuevas importaciones de capital.

Durante la última etapa del régimen del presidente Frei las inversiones extranjeras crecieron en un volumen notable, y no manifestaron reticencia por la política de "chilenización", estimuladas en múltiples casos por la perspectiva de "estar presentes en el mercado".¹⁸

¹⁶ *L'Express*, noviembre 2 de 1970.

¹⁷ CORFO: *Participación del Capital Extranjero en las Sociedades Industriales*, Santiago, 1970, p. 6.

¹⁸ Chile: Monto de inversiones autorizadas provenientes del extranjero.

1963	86.3 millones de dls.	1966	22.1 millones de dls.
1964	15.9 millones de dls.	1967	12.2 millones de dls.
1965	12.6 millones de dls.	1968	167.0 millones de dls.

Dada esta última característica y la estrechez del mercado chileno, las filiales extranjeras que se establecen sólo encuentran altos beneficios por maniobras directas sobre los precios de los productos, ventajas fiscales y sobre todo por el mecanismo de las regalías, pagos a sus matrices por aportaciones tecnológicas, por materias primas, *know-how* y créditos a altas tasas de interés, sin contar el efecto que ejercen sobre ciertos sectores de producción actuando como verdaderas empresas "tapón"; tampoco es extraño que su producción se funde en artículos de consumo innecesarios para el grado de desarrollo y las necesidades reales del país. Por otra parte, no se puede dejar de lado que las filiales que se establecen en mercados como el chileno tienen funciones y un grado de autonomía mucho más restringido que aquellas que se establecen en mercados como el brasileño, argentino o el mexicano.¹⁹

De las 160 empresas industriales más importantes del país, el 51.3 por ciento del total tienen participación extranjera. En 9 empresas la participación es inferior al 10 por ciento del capital, en un total de 28 inferior o igual al 30 por ciento, en otras 17 la participación se encuentra comprendida entre el 31 por ciento y el 50 por ciento, en 15 entre el 51 por ciento y el 75 por ciento y en 22 empresas la participación extranjera es superior al 75 por ciento del capital de cada una de ellas. En otros términos, 82 de las 160 empresas poseen participación extranjera y en 37 de ellas la participación supera el 50 por ciento del capital.

Las 160 empresas industriales reunidas por actividades dan resultados interesantes. Todas las empresas seleccionadas que caen dentro de los rubros: tabaco, caucho, productos de vidrio, minerales no metálicos, industrias básicas del fierro y acero e industrias básicas de metales no ferrosos poseen participación extranjera. En los dos primeros grupos subsiste sólo una empresa importante para cada uno de ellos y la proporción del capital extranjero supera el 50 por ciento en ambos casos.

Como es sabido, no hace falta poseer más del 50 por ciento del capital para ejercer el control de una empresa; en el caso chileno, dada la extrema dispersión de los accionistas nacionales, se puede considerar un porcentaje mucho menor capaz de ejercer dicho control, y la proporción de empresas bajo efectivo

¹⁹ CORFO. *Bases de discusión...*, *op. cit.*, p. 14.

control extranjero no serían un tercio sino una proporción mayor.

Reduciendo el número de empresas consideradas y conservando sólo las 100 más importantes, los resultados son aún más interesantes: 61 empresas poseen participación extranjera; en 21 la participación es inferior al 30 por ciento, en 12 se sitúa entre el 31 y el 50 por ciento, en otras doce entre 51 y 75 por ciento, y la participación extranjera de las 16 restantes supera el 75 por ciento. O sea, en 28 empresas (38 por ciento) la participación extranjera supera el 50 por ciento del capital, y en 40 empresas la participación extranjera depararía el 30 por ciento del capital.²⁰

Por rubros específicos la investigación de la CORFO arroja mucha luz sobre la posición de las empresas extranjeras en la economía del país andino. Industrias alimenticias: 6 empresas con participación extranjera mayoritaria son monopólicas o líderes en sus renglones de producción (café soluble, leche condensada y en polvo, preparados de chocolate, alimentos para niños, confites y caramelos, helados, mermeladas y jugos de frutas). Bebidas: una sola empresa con alta participación extranjera ejerce una posición dominante sobre el mercado. Tabaco: una empresa con participación extranjera mayoritaria predomina sobre el mercado. Textiles: existen tres empresas fundamentales en el sector con participación extranjera importante. La industria del cuero está formada por una multitud de empresas artesanales pero la investigación considera sólo la única empresa moderna con alto índice de capital con participación extranjera mayoritaria. Papel y productos de papel: una sola empresa considerada con participación extranjera importante (monopólica en la fabricación de cartulinas y tarjetas perforadas). Imprentas y editoriales: dos empresas (zig-zag y litografías modernas) poseen una participación extranjera importante y ejercen gran influencia en el sector. Fabricación de sustancias químicas industriales: cuatro de las cinco empresas consideradas poseen participación extranjera con proporción mayoritaria. Otros productos químicos: 9 de las 12 empresas consideradas poseen participación extranjera superior al 35 por ciento del capital. Productos de caucho: una sola empresa, con alta participación extranjera (monopólica en la fabricación de neumáticos y baterías automotrices). Fabricación de vidrio: las

²⁰ CORFO. *Participación del Capital...*, *op. cit.*, pp. 9-12.

tres empresas consideradas poseen capital extranjero. Productos minerales no metálicos: las ocho empresas consideradas tienen participación extranjera, en seis de ellas superior al 35 por ciento. Industrias básicas del hierro y acero: las seis empresas consideradas tienen participación extranjera, tres de ellas sobre el 34 por ciento. Metales no ferrosos: una sola empresa con participación extranjera del 30 por ciento (monopólica en la fabricación de cañerías y varillas). Productos metálicos: doce empresas, seis con participación extranjera, en cinco de ellas superior al 48 por ciento. Maquinaria y equipo mecánico: una sola empresa de las tres consideradas tiene participación extranjera importante. Maquinaria, equipo y accesorios eléctricos: diez empresas, cinco con participación extranjera, tres sobre el 66 por ciento del total. Construcción de material de transporte: seis empresas, cuatro de ellas con participación extranjera superior al 50 por ciento (automóviles y buques).²¹

El estudio de la CORFO no aclara la nacionalidad de los extranjeros que tienen capitales en las empresas estudiadas, pero es de considerarse una participación de origen estadounidense muy importante. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las inversiones norteamericanas en Chile ascendían en 1969 a casi mil millones de dólares; pero se sabe que en las estimaciones que el Departamento publica anualmente se subestiman ciertas colocaciones, que por diversas razones no pueden ser controladas con certeza por la estadística norteamericana.²²

Con respecto al programa de nacionalizaciones, en particular, el presidente Allende ha afirmado que cada caso sería examinado en detalle y las afectaciones se harían de acuerdo con la ley. El 13 de noviembre Pedro Vuskovic, ministro de Economía, confirmó el interés del gobierno de nacionalizar 26 bancos privados, de los cuales seis poseen capital extranjero. El 17 de noviembre el gobierno anunció la creación de una comisión encargada de estudiar la nacionalización de la industria del cobre, en la que hubieran surgido algunos problemas, según aclaró el 22 de noviembre Luis Valente Rossi, dirigente del Partido

²¹ CORFO, *op. cit.*, pp. 12-16.

²² Le revista *U.S. News & World Report* en su edición del 21 de septiembre de 1970, estima las inversiones estadounidenses en Chile en 1 200 millones de dólares, de los que 300 millones estarían en el sector minero, 200 millones en el sector de las comunicaciones (asegurado principalmente por la ITT) y 700 millones en el sector industrial y servicios comerciales, financieros, etcétera.

Comunista, ya que en la actualidad, ante una ley de nacionalización, los afectados pueden apelar con ventaja ante la Corte Suprema, por lo que se preveía una reforma a la Constitución. El mismo 22 de noviembre el gobierno anunció la "puesta bajo secuestro" de dos empresas de capital estadounidense por "irregularidades en su gestión". Las afectadas son: la Purina de Chile, filial de la Ralston Purina Company, fabricante de alimentos para animales, y la NIBSA, dedicada a la fundición de bronce, en la cual la Nebco South American Industries detentaba la mitad del capital. El 3 de diciembre el propio Allende anunció en Concepción la expropiación de la empresa textil más importante del país, en aplicación de las medidas antimonopólicas, la Caupolicán-Tome que pertenecía a un consorcio chileno.²³

La posición de Estados Unidos

Con lo que se ha visto, para cambiar de sistema el régimen de Allende deberá afectar fuertes intereses en el interior. Simultáneamente los más gruesos intereses a afectar del exterior son los de Estados Unidos. Los propósitos de la Unión Popular son un verdadero desafío a la concepción económica, social y política que sostiene la superpotencia norteamericana, lo que no escapa a nadie. Allende conoce bien la fuerza de sus rivales externos, y de ahí su gran moderación en los últimos tiempos.

Los Estados Unidos recibieron muy mal la noticia de que Jorge Alessandri "su candidato" había sido derrotado en los comicios chilenos. Para tener una idea de la poca simpatía que oficialmente les merece el nuevo régimen socialista, baste recordar que, mientras el cambio gubernamental del 1º de diciembre en México contó con la presencia del secretario de Estado William Rogers a la cabeza de la delegación norteamericana, en la toma de posesión de Allende, los Estados Unidos estuvieron representados sólo por su encargado de negocios que no era portador de ningún mensaje personal del presidente Nixon para el nuevo presidente.

Tanto Allende como el gobierno estadounidense saben que las dificultades más grandes pueden sobrevenir en el momento en que el nuevo régimen chileno decida la afectación de las empresas estadounidenses que, como se ha visto en el apartado anterior, perde-

²³ *Le Monde*, noviembre 14, 18, 23 y diciembre 4.

rían las muy buenas posiciones que tienen en la vida económica del país. En orden de afectaciones se espera que haya al menos dos etapas: 1ª aquella que marcará el traspaso completo de los bienes de las grandes empresas cupríferas al Estado, operación que había sido aceptada como un hecho por el gobierno norteamericano desde el régimen del presidente Frei; 2ª es posible esperar tensiones mucho mayores cuando se afecten los bancos, las aseguradoras y particularmente las empresas que Allende designa como "monopolios" que condicionan la vida económica y social.

La actual administración norteamericana se ha tomado su tiempo para definir la política a seguir con América Latina. En principio ha liquidado las operaciones espectaculares o "maniobras de distracción" económica considerando que habían cumplido sus fines (tales como la Alianza para el Progreso). También ha liquidado las diversas políticas, en ocasiones contrapuestas, simultáneamente llevadas por el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, en la subregión, unificándolas en una sola "visión pragmática" en la que el presidente tiene un papel mucho mayor.²⁴ En adelante las consideraciones de orden estratégico tendrán un peso tan grande como las de orden económico. Justamente una de las mayores inquietudes de Washington estriba en pensar que el nuevo Chile no sólo pueda poner en jaque las inversiones estadounidenses en ese país andino sino en alterar la relación de fuerzas en el sur del continente y eventualmente todo el equilibrio y el "orden" del mundo occidental.²⁵

Estas "razones" explicarían, tal vez, el poco discreto deseo de Washington de intervenir actualmente en situación de "espera", aguardando sólo la mejor oportunidad. La guerra psicológica contra el régimen chileno se puede considerar iniciada a partir de la campaña desatada por la prensa norteamericana en los primeros días de septiembre y las breves pero no menos claras declaraciones oficiales.

En la concepción de Washington otro problema es el que presentan las relaciones exteriores de Chile. En esto habría también una escalada de dos tipos que podría resumirse en los símbolos: un Chile "libre" o "autónomo" y además sin posibilidades de "conta-

²⁴ *Nouvel Observateur*, noviembre 2 de 1970.

²⁵ A fines de septiembre de 1970 un consejero del presidente Nixon declaraba en Chicago, en el curso de una reunión de información: "Tememos que la instalación de un régimen comunista en Chile pueda favorecer la aparición de un fenómeno similar en Argentina, Perú o Bolivia."

gio". Primeramente, que Chile establezca relaciones políticas y económicas con los países socialistas, sin distinción, será un rudo golpe para la "tranquilidad" de la hegemonía estadounidense, pero al fin podría aceptarse. Pero de ninguna manera aceptaría Washington que Chile perdiese, aun "relativamente", su independencia en favor de la política, la economía o la estrategia militar de los países socialistas, o más claro, del único país con posibilidad de hacer algo en territorio chileno: la URSS. Las "inquietudes" de Washington aparecieron a la luz al pedir y obtener la Unión Soviética "seguridades" de que no utilizaría en su favor la existencia de regímenes "izquierdistas" en el triángulo neurálgico andino: Chile, Perú y Bolivia.²⁶

Las medidas a tomar

Como es habitual, Washington no discutirá, seguramente, el derecho de los Estados para realizar afectaciones de la propiedad de extranjeros, pero es bien probable que se mantendrá en la línea de exigencia del supuesto "requisito internacional" para que se otorgue una indemnización "previa, adecuada y efectiva" a sus nacionales afectados. Pretexto útil como elemento de presión, a sabiendas de que no se puede cumplir, como ha sido demostrado en la mayoría de las precedentes nacionalizaciones en América Latina y en el mundo. También es éste un elemento usual para atraerse una parte, no despreciable, de la opinión pública de los países desarrollados en favor de sus empresas y accionistas desposeídos. La medida podría además tener otros efectos interesantes, como el de medir el grado de cohesión de que goza el equipo dirigente chileno o la popularidad de las iniciativas del gobierno chileno dentro de la población considerada por sectores.

Es posible también que por la puesta en marcha del programa y por el deseo de paliar los graves desajustes económicos y sociales, el gobierno chileno decida recurrir a la adopción de severas medidas fiscales y manipular en su favor las tarifas de los servicios públicos; el descontento que tales medidas eventualmente acarrearía entre las clases medias y acomodadas no dejaría de ser aprovechado por Washington, mostrando por otra parte, en el exterior, los "efectos perniciosos de la nueva economía de Estado".

En el caso chileno el chantaje, el boicot, las amenazas de "represalias" y otras "sanciones" económicas

se revelarían poco eficaces, en virtud de que el país no depende más que en un quinto de sus exportaciones e importaciones con respecto de Estados Unidos, y de que la "ayuda", militar principalmente, asciende a sólo unos cuantos millones de dólares al año. Una intervención militar directa tendría muy serios problemas técnicos, logísticos en particular y complicaciones políticas insolubles.

Con respecto a los organismos internacionales, Washington no se hace ilusiones respecto a su utilidad actual para "castigar" la heterodoxia, como fue el caso de la OEA con Cuba y, poco después, en el de la República Dominicana. Ya desde el diferendo entre Lima y Washington a consecuencia de la International Petroleum Company, el actual secretario general de la OEA se reveló como hombre "poco manipulable". Recientemente, refiriéndose al anuncio del restablecimiento de relaciones entre Chile y Cuba, expresó que Chile "no había desafiado" a la organización que representa y estaba en su derecho para hacerlo. Es significativo que, en esa ocasión, no haya hecho ninguna referencia al "lamento" oficial de Washington en el sentido de que el país andino "no hubiese consultado a la Organización".

En estas condiciones, la única carta válida del gobierno estadounidense es la del ejército. Idea que Washington generaliza para Bolivia, Perú y Chile. Para ello se realizan sondeos entre los oficiales, que en el caso de Perú se iniciaron desde la primera llegada a Lima del abogado John N. Irwin, enviado personal del presidente Nixon para tratar directamente con el gobierno peruano los problemas de la afectación de la IPC. En Bolivia es bien conocida la existencia de varios cientos de "técnicos y consejeros" militares antiguerrillas, del contraespionaje y otros que "asisten" y colaboran directamente con el ejército boliviano.

Con Chile existe un acuerdo de asistencia militar. En uso de sus cláusulas, llegaron al país 86 oficiales norteamericanos acompañados de sus familiares para realizar estudios de la "alta atmósfera" en tres bases meteorológicas controladas por Estados Unidos en territorio chileno. La sorpresiva llegada del crecido número de oficiales un día después de las elecciones de septiembre, inquietaron tanto al gobierno como a la opinión pública chilena. A fines de octubre el gobierno estadounidense hizo saber que cerraría las

²⁶ *Nouvel Observateur*, op. cit.

bases meteorológicas en Chile, pero continuaría la "asistencia" militar.

En el fondo Washington confía en llegar a aislar a los tres regímenes "izquierdistas" del sur del continente, y realiarlos paulatinamente a la política estadounidense. De éstos, el régimen del general Torres en Bolivia es el que causa menos aprehensiones, y, obviamente, el régimen militar peruano ocupa el orden intermedio. Con ese propósito se preparan todo tipo de medidas: las legales y las "otras" en las que jugarían un importante papel los ejércitos o cuadros activos de los mismos, para actuar en el caso de que la conformación se revelase "inadecuada".²⁷

Para la aplicación de sus planes, los Estados Unidos esperan contar con la colaboración de los regímenes militares de Argentina y Brasil, que no han recogido la rama de olivo que Santiago les ofreciera en noviembre pasado. Por el contrario, por lo que a Brasil respecta, ha iniciado una campaña contra el régimen chileno.²⁸

El margen de acción chileno

Pero Chile también puede actuar. Económicamente su tradicional liga de intercambios con Europa (que asegura el grueso de sus intercambios externos) sería suficiente para paliar cualquier maniobra al respecto. El establecimiento de relaciones con los países socialistas y el estrechamiento de relaciones con los latinoamericanos, aumentan el margen de seguridad.

Se subestima también que Chile puede organizar campañas de opinión, como las que hábilmente llevaron a cabo los peruanos en ocasión del conflicto con la IPC y que tan buenos resultados tuvieron sobre la opinión, particularmente latinoamericana.

También se ha tomado muy poco en cuenta que Chile es miembro, muy activo por cierto, de un grupo de integración económica subregional, sin duda uno de los más dinámicos que existen entre países en vías de desarrollo: los países miembros del Grupo Andino que han establecido una red de interacciones y cuyos intercambios recíprocos no son despreciables. Los países miembros de este grupo resentirían cualquier medida que Estados Unidos decida unilateralmente contra Chile. Precisamente el 3 de noviembre de 1970 los países del Grupo Andino llevaron a cabo en Lima una reunión destinada a examinar un proyecto de esta-

²⁷ *Nouvel Observateur*, op. cit.

²⁸ *Le Monde*, diciembre 1º de 1970.

tuto conjunto para el "tratamiento del capital extranjero".²⁹ También se tiene poca consideración de la antipatía que han suscitado en todos los países del subcontinente los proyectos de restricción de importación de los productos latinoamericanos en el mercado norteamericano. El mismo 3 de noviembre una comisión especial reunida en Washington hacía pública una amenaza de los países latinoamericanos indicando la adopción de represalias si el Congreso norteamericano aprobaba tales proyectos discriminatorios. Finalmente, Chile es uno de los principales animadores de la Comisión Económica de Coordinación Latino Americana (CECLA) que ha aglutinado en pocos años el criterio de la subregión para negociar conjuntamente con los países desarrollados sobre diversos problemas económicos.

Con lo que se ha visto, Chile puede actuar también y emprender su propia guerra psicológica pero, en cualquier forma, tendrá que mantener relaciones más cordiales con los 60,000 hombres de su ejército que las que Estados Unidos piensan conservar con el mismo.

Conclusión

1. La llegada al poder de un régimen de ideología marxista en Chile es un hecho perfectamente normal en un país que puede enorgullecerse del tradicional juego democrático de las fuerzas políticas. El país atraviesa serios problemas económicos y sociales, y los dos tercios de la población aspiran a reformas radicales. A nadie puede extrañar que triunfasen quienes proponían las mejores fórmulas para atacar los problemas.

2. Entre las soluciones que propone el nuevo régimen está la de iniciar el cambio de las estructuras para arribar finalmente al cambio de sistema (político-económico-social). Los nuevos dirigentes confiesan que el arribo al socialismo será prácticamente imposible en los seis años de su gobierno solamente.

3. Washington ha hecho público su disgusto por la instauración del nuevo régimen, situado al otro extremo del continente y de sus fronteras, y ha confesado tener poco margen de maniobra para "intervenir" debido a la forma perfectamente legal que llevó al poder al régimen avanzado.

4. Para evitar males mayores, el nuevo régimen chileno adoptó una posición de extrema moderación para

²⁹ *Excelsior*, México D. F., noviembre 4 de 1970.

calmar a las fuerzas internas de la derecha y apaciguar a los Estados Unidos, ante lo que éstos últimos no han dado ninguna muestra de simpatía o convencimiento. Por el contrario, la gran potencia estadounidense guarda como la mejor de sus cartas contra el nuevo gobierno la de estimular un derrocamiento a través del ejército chileno, culminación de una campaña interna y externa de desprestigio.

5. El régimen allendista no puede permanecer indiferente y tendrá que tomar medidas de resguardo interno sin dejar de aplicar su programa de reformas. En el exterior podría utilizar el respaldo de sus socios en los sistemas internacionales regionales de integración, lo que no parece difícil de conseguir. Económicamente sus tradicionales ligas con Europa y las nuevas que puedan establecerse con los socialistas le pondrán a resguardo en este aspecto.

6. El apoyo de los países socialistas es un hecho, y lo que más teme Washington es que Chile se repliegue en buena medida a la ayuda de éstos, pues podría convertirse en una realidad, por el momento lejana, si los Estados Unidos insisten demasiado en favor de sus intereses con nulo o ningún aprecio por entender los problemas de este pueblo.

7. La nueva política estadounidense hacia América Latina, basada en consideraciones "pragmáticas, estratégicas y económicas" valdría la pena de ser revisada con objeto de tener en cuenta que, además de los intereses estadounidenses en nuestros países, existen los intereses de los pueblos que aspiran a sacudirse el subdesarrollo y la dependencia. No entender esto último podría dar nuevas sorpresas a pesar de las medidas preventivas.